

Comisiones Asesoras Presidenciales en Chile: Entre la *expertise* y la pluralidad de actores sociales

Carla Cisternas

Universidad de Santiago de Chile

Javiera Vásquez

Universidad de Santiago de Chile

Abstract: Presidential Advisory Boards in Chile: Between Expertise and the Plurality of Social Actors

This article studies the social background of one of the most used public deliberation mechanism by the executive branch: the presidential advisory commissions. A thorough description of its members is offered, and, using a Social Network Analysis (SNA), it explores and compares the use of this mechanism between ideologically opposed governments. Similar tendencies in both administrations are noted, and the important predominance that the Chilean intellectual community has in these pre-legislative instances is also distinguished. Although other actors of the political and social fields are called to participate in these spaces, the pragmatic technocrats, agents with important academic credentials and non-political outsiders are the ones who head civil expertise at the presidential level. *Keywords:* technocracy, intellectual elites, political elites, expertise, Chile.

Resumen:

Este artículo estudia el trasfondo social de uno de los mecanismos de deliberación pública más utilizado por el Ejecutivo: las comisiones asesoras presidenciales. Se ofrece una descripción detallada de sus integrantes, y con un Análisis de Redes Sociales (ARS) se explora y compara el uso de este mecanismo entre gobiernos ideológicamente opuestos. Se observan tendencias similares en ambas administraciones y se distingue el importante predominio que tiene la comunidad intelectual chilena en estas instancias prelegislativas. Si bien otros actores del campo político y social son llamados a participar en estos espacios, los tecnócratas pragmáticos, agentes con importantes credenciales académicas, sin militancia y alejados de la política, son quienes lideran el asesoramiento civil a nivel presidencial. *Palabras clave:* tecnocracia, élites intelectuales, élites políticas, asesoramiento, Chile.

Introducción

Las Comisiones Asesoras Presidenciales (CAP en adelante), también llamadas Consejos Asesores Presidenciales, son espacios alternativos para la formulación de políticas públicas. Se originan por mandato del presidente de la República, con el fin de entregar un sello de objetividad a la creación de proyectos de ley desde dos perspectivas: la *expertise* o la participación de actores (Aguilera, 2009). Desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos han convocado CAPs para el trabajo en diversas áreas. Algunos han interpretado estos espacios desde el punto de vista de la *expertise*, configurándose así comisiones conformadas por personas con una gran capacidad técnica. Destacan dentro de ellos los llamados tecnócratas, quienes se caracterizan por un bajo perfil público e importantes credenciales universitarias que validan su conocimiento y experiencia en diversos temas. Este tipo de perfil pretende imprimir un sello de objetividad al asesoramiento presidencial que realice la comisión. Por otro lado, comisiones formadas con el objetivo de fomentar la participación ciudadana pretenden abrir espacios para el diálogo y la deliberación de políticas públicas elaboradas desde la pluralidad de actores. De esta manera, las sugerencias de la comisión son producto de negociaciones, acuerdos y consensos entre los integrantes, lo que pretende asegurar una toma de decisiones más imparcial. Bajo esta lógica, quienes participan son mayoritariamente tecnócratas, dirigentes gremiales, representantes de grupos de interés, de movimientos sociales y, según la temática, diversos actores que tengan relación con la correspondiente CAP.

El sello transversal que pretende imprimir la participación ciudadana tiene lugar en la promoción de la idea de democratización de la toma de decisiones (Garretón, Cruz & Aguirre, 2012) e integración de actores fuera del mundo político y limpios del descrédito ciudadano, lo que permite mejorar la aceptación por parte de la ciudadanía de las ideas que emanen desde el Ejecutivo (Zegart, 2004). Por esta razón, resulta fundamental la pluralidad política en las comisiones, pues se procura hacer frente a los problemas de representación y desaprobación gubernamental. Estas características justifican la creación de instancias alternativas a los clásicos espacios de discusión pública de la élite política como el Ejecutivo y el Congreso. Cabe destacar que las CAPs no suplen el rol legislativo de estas instituciones. De hecho, en términos de origen, los espacios tradicionales son más democráticos, pues se componen por representantes electos popularmente, a diferencia de la composición discrecional de las CAPs. En estricto rigor, este trabajo no pretende caracterizar a las CAPs como espacios inherentemente más democráticos para la formulación de políticas públicas, sino que intenta observar la democratización de actores al interior de esta, es decir, qué tan pluralista es la invitación que realiza el Ejecutivo a la discusión pública.

En definitiva, el siguiente trabajo busca responder si las CAPs son un espacio para la participación y democratización de actores y, por tanto, de ideas, o si más bien se configuran como un escenario de tecnocracia y acción de las élites políticas e intelectuales. Lo anterior con el objetivo de evidenciar si son espacios

racionales y fuera del mundo político, teniendo en cuenta que son instancias creadas a completa discrecionalidad del gobierno. Para esto, se trabaja con el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Esta selección de casos permite comparar –en palabras de los propios mandatarios– el “gobierno ciudadano” de Bachelet y el “gobierno de los mejores” de Piñera. Este trabajo se organiza en tres apartados. Primero, se presenta un apartado teórico sobre élites políticas y tecnocracia, comisiones asesoras y consejos consultivos. En segundo lugar, se presenta el caso de las CAPs en Chile de manera comparada, se indica la metodología utilizada y se presentan los hallazgos obtenidos con el análisis estadístico descriptivo y el Análisis de Redes Sociales (ARS en adelante). Finalmente se entregan las conclusiones.

Élites políticas y tecnocracia en las democracias representativas

El estudio contemporáneo de las élites se remonta inicialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde surgió lo que hoy conocemos como la teoría clásica de élites. Con posterioridad a este enfoque, la comunidad científica ha intentado continuar con el objeto de estudio de “quienes nos gobiernan” diversificando el concepto de élite política a otros como “clase política”, “clase dirigente”, “tecnocracia” o “burocracia política”, entre otros (Joignant, 2011a). Si bien no es fácil unificar el concepto élite o cualquiera de sus denominaciones, es posible señalar un piso mínimo conceptual que integra tres tipos de élites: política, económica y cultural. De estas, las primeras dos han acumulado la mayor cantidad de trabajos en desmedro del estudio del rol de las élites culturales o intelectuales y de su importante vinculación con la élite política (González-Bustamante, 2016). A pesar de lo anterior, existen destacados trabajos que han intentado evidenciar la relación existente entre la élite intelectual, compuesta por expertos, académicos y científicos, y la élite política conformada, en su mayoría, por políticos profesionales en términos *weberianos*. Esta relación, además de ser en muchos casos bastante estrecha en su composición sociológica, con frecuencia da lugar a una importante tensión entre la *expertise* y la democracia representativa¹. Por un lado, las élites intelectuales argumentan su postura en la toma de decisiones desde la objetividad de la ciencia; por otro lado, las élites políticas, defienden su rol como representantes ciudadanos.

Brown (2009) estudió esta relación entre la ciencia y la política en los espacios de discusión pública y señaló la susceptibilidad de la ciencia para politizarse en contextos de poder y conflicto. Bajo este argumento, Brown (2009) concluyó que la toma de decisiones en las democracias representativas debe incluir necesariamente consejos asesores, sin embargo, la discusión debe integrar a la vez elementos sustanciales de la representación política como la representatividad de las autoridades electas, la rendición de cuentas, y la participación y deliberación ciudadana. Estos últimos elementos configuran otro enfoque para explicar la tensión entre *expertise* y democracia, donde el rol de los gobernados como

actores del proceso decisional resulta fundamental. Fisher (2009) analizó el rol de los expertos en las democracias representativas y señaló la importancia de vincular la *expertise* con la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas. Fisher (2009) indicó la trascendencia de implementar un modelo de gobernanza descentralizada, donde se desarrolle una transferencia de conocimientos, perspectivas y experiencias entre los expertos, los políticos y la ciudadanía. Esta idea va en la línea de lo planteado por Evans (1995), quien demuestra la necesidad de un trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada, la burocracia y los sectores especializados para un desarrollo estatal exitoso.

El desarrollo de la tecnocracia en el campo político chileno

El estudio de las élites políticas chilenas ha estado marcado por una importante sucesión de trabajos enfocados en estudiar al personal gubernamental, donde el fenómeno de la tecnocracia ha tomado un valor importante. En Chile, la tecnocracia en el Estado se remonta a la primera mitad del siglo XX, sin embargo, fue décadas más tarde cuando los expertos tuvieron un rol clave en el asesoramiento presidencial. A mediados de la década de 1970, la tecnificación de las políticas públicas comenzó a tomar valor en medio de un proceso de reformas políticas y económicas que tenían como finalidad el cambio en el modelo económico chileno. Si bien es durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende que el rol de los expertos comenzó a tener influencia en las decisiones públicas, el contexto de fuerte politización silenció a los primeros tecnócratas que, bajo un discurso de izquierda, revolucionario y obrero, revelaban un cierto origen burgués debido a su condición intelectual (Silva, 1991).

Tras el quiebre de la democracia, la radicalización política previa al golpe de Estado impulsó la idea de políticas públicas alejadas de la ideologización y cercanas a la racionalidad. Aquello abrió una oportunidad para que jóvenes profesionales se movieran desde la sociedad civil hacia el Estado, consiguiendo alcanzar un rol determinante en el manejo de este (Silva, 1991). El poder, la visibilidad y la valoración que logra tener la élite intelectual se debe a dos situaciones. Primero, la prohibición de partidos políticos y el cierre del congreso suprimieron la institucionalidad donde tradicionalmente se formulaban políticas públicas, concentrándose el poder de forma casi absoluta en el gobierno. Como consecuencia de esto, la participación de los tecnócratas, específicamente los *Chicago boys* como asesores de gobierno, tuvo un impacto sustancial en la materialización de sus ideas en leyes. Además, la marginación en las universidades de profesores y estudiantes opositores al régimen generó la creación de centros de pensamiento privados ligados a la centroizquierda, donde se reunieron importantes líderes intelectuales y políticos (Delamaza, 2011). La Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) es el mejor ejemplo. En este *think tank*, destacados políticos – la mayoría de ellos con importantes credenciales y experiencia académica y política – estudiaron temas públicos y mediante sus

publicaciones lograron ser una oposición tolerable por la dictadura (Maillet, Toro, Olivares y Rodríguez, 2016).

Por otro lado, la misma racionalidad que originó el realce de los tecnócratas favoreció su desarrollo y valoración positiva: con el argumento de hacer políticas públicas sin sesgo ideológico, las credenciales académicas del equipo de economistas neoliberales entregaron una garantía de objetividad a la conducción del Estado. De esta manera, la ciencia y la técnica se posicionaron como elementos relevantes en la discusión de políticas públicas hasta el día de hoy. Con la llegada de la nueva democracia, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, el espacio ganado por los tecnócratas perduró, ingresando nuevos profesionales a la asesoría de gobierno, esta vez ligados a la centroizquierda (Delamaza, 2011). Así la influencia de la racionalidad en la toma de decisiones públicas se ha mantenido constante desde el gobierno de Aylwin; ya sea desde el asesoramiento permanente hacia el Ejecutivo o desde otros espacios híbridos como las CAPs o los Consejos Consultivos (Aguilera, 2009). A pesar de esta estabilidad, la razón de ser de instancias exclusivamente tecnócratas ha variado: en un comienzo se originó netamente para hacer frente a la radicalización política de los años setenta, cuestión que ha cambiado en las últimas décadas donde su causa ha estado en la necesidad de acallar o responder problemas de representatividad.

La investigación sobre los miembros de las élites políticas para distinguir conceptualmente quién es quién resulta imprescindible para el entendimiento de la tecnocracia. Más que por describir características, para identificar diferencias (o similitudes) sociales y políticas entre quienes gobiernan (Joignant, 2011c). Es precisamente este tipo de trabajos, principalmente ligado a la sociológica política, con énfasis en los años post dictadura, donde el hallazgo de la tecnocracia inspiró buena parte de los estudios de élites políticas en Chile. Un estudio de Joignant (2011c) sintetizó y distinguió claramente los tipos de agentes presentes al interior del campo político. Para esto midió diferentes tipos de capital presentes en aquellos que ocupan cargos políticos importantes, logrando distinguir tres tipos de agentes: los tecnócratas, los *technopols* y los dirigentes de partido.

Para Joignant (2011c) los tecnócratas presentan dos tipos de *capital tecnocrático*: (a) capital tecnocrático pragmático, referidos a recursos de naturaleza racional (por ejemplo, estudios) en ausencia de patrimonio político; y (b) capital tecnocrático político, en el que se exhiben recursos políticos referidos particularmente a la militancia partidaria. De aquellos se pueden desprender dos variantes de tecnócratas: en primer lugar, el tecnócrata pragmático, de independencia política, que podría transitar desde un gobierno de centroizquierda a uno de centroderecha sin problema; y, en segundo lugar, el tecnócrata político, con participación en política y habilidades técnicas (Joignant, 2011c). El segundo grupo de agentes son los *technopols*, concepto popularizado fundamentalmente por Domínguez (1997). Los *technopols* son sujetos que destacan dentro del Estado por sus conocimientos técnicos y políticos. Se caracterizan por poseer una especializada profesionalización, provenir de sectores acomodados de la sociedad, con postgrados en el extranjero, gran capital cultural y una importante red de

contactos internacionales. Los *technopols* no son lo mismo que los tecnócratas políticos que plantea Joignant (2011c), su diferencia principal se relaciona con el capital político. Por un lado, el tecnócrata político presenta cierta actividad política que le permite diferenciarse del tecnócrata pragmático, sin embargo, esta actividad solo alcanza niveles menores, pudiendo ser un simpatizante o un militante pasivo de algún partido político. Mientras que la figura del *technopols* muestra un equilibrio entre capitales técnicos y políticos. Si bien posee una capacidad técnica destacada, sus recursos políticos sobrepasan una participación parcial en política, más bien presentan una implicancia importante en asuntos partidistas y, sobre todo, una experiencia en cargos políticos relevantes (presidente, vicepresidente, secretario general del partido, miembro del comité central, directiva nacional, entre otros) antes de su primer nombramiento en el Ejecutivo (Joignant, 2011c). Finalmente, un tercer agente son los dirigentes de partidos quienes presentan dos tipos de capital político: (a) capital militante, entendido como la militancia política activa durante buena parte de su vida que da origen al hombre de partido; y (b) capital político oligárquico, el cual comprende la ocupación de cargos directivos dentro del partido y que da lugar al político profesional que desempeña una vida en cargos relevantes en el Ejecutivo, en el legislativo, o en ambos (Joignant, 2011c).

En esta misma línea, Silva (2010) señala que el periodo comprendido entre los años 1990 y 2010, luego del retorno a la democracia y en los periodos en que gobernó la Concertación, evidencia la existencia de una élite tecnocrática conformada por sujetos que poseían dos rasgos claves. Por un lado, importantes credenciales universitarias con estudios de postgrados en el extranjero, especialmente en Estados Unidos (rasgo técnico) y, por otro lado, una gran influencia en la toma de decisiones públicas lo que les permitió tener un rol clave en las reformas políticas post dictadura (rasgo político). Fue el rasgo técnico el que pesó más y permitió el desarrollo del rasgo político, generándose una tensión entre aquellos que pertenecían a la élite política tradicional, especialmente los políticos profesionales, y esta nueva élite tecnocrática. De cierta forma las credenciales universitarias llegaron a ser igual o incluso más valoradas que las ideas de aquellos que llevaban años desempeñándose en estos cargos decisivos. Esta tensión comenzó a tomar fuerza en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), y se incrementó enormemente en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) (González-Bustamante, 2013).

Esa tecnificación política, según Delamaza (2011), evidencia dos fenómenos macro. Primero, la existencia de una élite conformada por aquellos que participaron activamente, en el bando que sea, durante el periodo de dictadura, fenómeno que denominó *elitismo democrático*. Esta situación se vincula a las alianzas y pactos hechos entre la derecha y la centroizquierda para el retorno de la democracia que dificultaron el acceso a cargos de poder a personas fuera de los dos bloques políticos. El segundo fenómeno comprende la propagación de la *tecnopolítica* debido a la gran valoración y legitimidad que adquirieron los expertos. Aquello se fundó en el reclutamiento de un importante número de

personas para la nueva administración de Aylwin desde centros de estudios privados. Según Delamaza (2011) la *tecnopolítica* fue una transformación del *elitismo democrático*.

Comisiones Asesoras

Los estudios sobre élites políticas en Chile se han centrado en estudiar las estructuras formales donde estas se posicionan. De ahí la importancia de estudiar y teorizar posiciones informales o híbridas como el rol de la asesoría. En Chile, existen cuatro trabajos al respecto: Aguilera (2007, 2009), Aguilera y Fuentes (2009), y Garretón, Cruz y Aguirre (2012). El presidente en Chile posee amplias facultades para proponer proyectos de ley, produciéndose un trabajo legislativo emanado, en su mayoría, desde el Ejecutivo. Esto genera una necesidad de requerir personal que trabaje en la discusión y elaboración de políticas en determinados asuntos públicos. Este panorama, sumado al auge de la tecnocracia y la participación ciudadana, da lugar a espacios alternativos de formulación de políticas públicas como las comisiones asesoras. Dentro de ellas, se pueden reconocer dos tipos: (a) ministeriales, que tienen como objetivo aconsejar a un determinado ministerio; y (b) presidenciales, que aconsejan específicamente al presidente (Aguilera, 2009).

Desde el retorno a la democracia todos los gobiernos han convocado CAPs con el objetivo de discutir y hacer propuestas de política pública en diversas áreas, sobre todo en temas políticamente controversiales o que requieren de importantes conocimientos técnicos (Aguilera, 2009). Se distinguen cuatro formas de presentar la asesoría al gobierno: (a) comisiones interministeriales de duración definida; (b) comisiones interministeriales de duración permanente, ambas compuestas solo por miembros del gobierno; (c) comisiones asesoras presidenciales permanentes; y (d) comisiones asesoras presidenciales *ad hoc* (CAP), compuestas por personas externas al gobierno (Aguilera, 2009).

La conformación de una CAP *ad hoc* en Chile es una atribución exclusiva del presidente. Estas comisiones, integradas por un presidente, una secretaria ejecutiva que apoya sus labores y el resto de los miembros convocados, se caracterizan por tener duración definida, centrar su trabajo en una materia o tarea específica y, a partir de ello, elaborar uno o más informes con propuestas de política pública. Todos los integrantes trabajan generalmente *ad honorem* con la excepción de contar con una secretaria técnica que apoye labores operativas. Además de este formato tradicionalmente utilizado, las CAP *ad hoc* no son instituciones formales reglamentadas en la legislación chilena, no tienen regulación ni en su formación, composición o funcionamiento, lo que entrega una gran flexibilidad en su conformación (Aguilera, 2009; Garretón, Cruz & Aguirre, 2012).

El origen de una CAP se puede dar en distintos contextos y por diferentes causas. Destacan dentro de sus orígenes, la necesidad del Ejecutivo de profundizar ciertos temas de decisión pública, la pretensión de generar consenso frente a situaciones de discrepancia con diversos sectores o la urgencia de demostrar a

la ciudadanía que el gobierno actúa ante asuntos de su interés. En algunos casos, se conforman para validar de manera técnica algunas políticas públicas que ya han sido ejecutadas, sin que su objetivo sea generar grandes cambios en la ejecución, sino más bien en la opinión pública. Generalmente el Ejecutivo busca dar visibilidad a la constitución y al trabajo de las comisiones, ya que su origen recae sobre alguna situación de crisis pública que requería la pronunciación del gobierno (Zegart, 2004).

Las CAPs *ad hoc* integran en la toma de decisiones a personas destacadas provenientes de la sociedad civil con el fin de ampliar la participación en la elaboración de políticas públicas. Es posible encontrar dos perspectivas de cómo el Ejecutivo entiende la integración de actores. Por un lado, puede utilizar estas instancias para convocar a expertos en el tema, entregando una garantía de racionalidad a la creación de una propuesta de política pública que está bajo el escrutinio público. La inclusión de estos actores generalmente es valorada positivamente por la opinión pública pues, como señala Zegart (2004), son personas externas a cargos del Estado y, por tanto, limpios del descredito ciudadano. Además, su gran educación los avala como personas congregadas por sus conocimientos en la materia y no por cercanía política, de ahí que los tecnócratas sean altamente reclutados (Aguilera, 2009; Garretón, Cruz & Aguirre, 2012). Desde esta perspectiva Zegart (2004) señala que se produce una situación de *win win* que beneficia a ambas partes: mientras las propuestas del gobierno son aprobadas y aceptadas con mayor facilidad por la ciudadanía, los tecnócratas, por su parte, adquieren mayor visibilidad.

Una segunda perspectiva entiende estos espacios como mecanismos para ampliar la participación ciudadana desde la pluralidad de actores. Aquí se seleccionan, además de expertos, representantes políticos o sociales vinculados al tema de la CAP como gremios, sindicatos, representantes religiosos, grupos étnicos, de interés, entre otros, con la necesidad de llegar a acuerdos en temáticas complejas y controversiales (Garretón, Cruz & Aguirre, 2012). Este modo de trabajar fue particularmente utilizado en el primer gobierno de Michelle Bachelet que buscó instalar el concepto “gobierno ciudadano”, es decir, cercano a la ciudadanía y alejado de las élites político-partidarias (Aguilera, 2009). El gobierno cambió la forma tradicional de entender las CAPs *ad hoc* durante los gobiernos anteriores y señaló específicamente sus objetivos: (a) promover un diálogo entre distintos actores de la sociedad, (b) generar un espacio de discusión y participación, y (c) proponer recomendaciones en políticas públicas (Aguilera, 2009). Los pocos trabajos sobre CAPs en Chile, no permiten tener conocimientos previos al primer gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, este periodo permite observar que estas se originaron de dos maneras: por estar contenidas en el programa de gobierno o para hacer frente a conflictos coyunturales (Aguilera, 2009; Garretón, Cruz & Aguirre, 2012). De la conformación de las comisiones se observa

Tabla 1: Comisiones Asesoras Presidenciales 2006-2014

	CAP	N° integrantes
Michelle Bachelet (2006 – 2010)	CAP para la Reforma Previsional	15
	CAP para Reforma de las Políticas de Infancia	14
	CAP para la Calidad de la Educación	82
	CAP de Expertos sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública	7
	CAP para la Calidad de la Educación Superior	30
	CAP Trabajo y Equidad	48
	CAP para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Comisión Valech2)	9
Sebastián Piñera (2010-2014)	CAP Mujer, Trabajo y Maternidad	16
	CAP de Salud	13
	CAP de Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera	7
	CAP para la Seguridad en el Trabajo	11
	CAP para el Desarrollo Eléctrico	15
	CAP de Expertos para creación de Plan Garantizado de Salud en las ISAPRES	8
	CAP de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior	11
	CAP para la Defensa de la Libre Competencia	13
	CAP para la Política Nacional de Desarrollo Urbano	29
	CAP de Expertos para la Actualización de la Línea de la Pobreza y de la Pobreza Extrema	10
	CAP Institucionalidad Ciencia, Tecnología e Innovación	13
		351

Fuente: Elaboración propia.

que, en términos de representatividad, esta varía según el origen de la CAP. Aquellas que emanan de movilizaciones sociales o problemas coyunturales congregan una mayor pluralidad de actores, especialmente de la sociedad civil (Garretón, Cruz & Aguirre, 2012).

Metodología

Este trabajo es descriptivo pues ofrece una caracterización de la composición de las CAPs con el objetivo de analizar su rol como mecanismos de participación de las élites políticas y tecnócratas en las decisiones de política pública. Para cumplir con el objetivo de esta investigación se trabajó, en una primera instancia, con las características institucionales de las comisiones. Para esto se utilizaron los informes finales de cada comisión, decretos, prensa, programas de gobiernos

e información de la Biblioteca del Congreso Nacional (Véase anexo 1). Por otro lado, se realiza un análisis de la composición, con datos atributivos de los integrantes de las CAPs del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y Sebastián Piñera (2010-2014). Son considerados miembros aquellas personas que fueron nombradas exclusivamente por el presidente de la República y que no abandonaron la comisión a mitad de trabajo. Es decir, aquellos que figuran como autores del informe final que emana de cada comisión. Los consejeros corresponden al presidente de la comisión, al secretario Ejecutivo –presente en algunos casos– y al resto de los integrantes.

Las comisiones estudiadas alcanzan un total de dieciocho casos, siete en el gobierno de Michelle Bachelet y once en el gobierno de Sebastián Piñera. Los consejeros rastreados suman un total de 351 casos, los cuales corresponden a 309 personas. El análisis se realiza sobre $N = 351$, para una descripción completa por comisión y período. Los casos repetidos corresponden a 33 personas, algunas de ellas repetidas en más de una ocasión y con participación en ambos gobiernos.

La metodología contempla, en una primera parte, un análisis descriptivo para caracterizar a los comisionados. Posteriormente, se realiza un ARS de los 351 integrantes, que permite dar cuenta del grado de diversificación de una red social. El ARS tiene el propósito de observar las características de una red con el fin de explicar el comportamiento social de un grupo (González y Cisternas, 2016). En este caso, se pretende distinguir algunos espacios de socialización referidos a su capital técnico: universidades de pregrado y universidades de postgrado. Además, se pretende identificar profesiones dominantes al interior de las comisiones. Según Huneeus (2011) estas relaciones informales configuran sujetos socialmente parecidos y auto-identificados entre sí como pertenecientes al mismo lugar.

Una red se compone de *nodos* y *aristas*. Los *nodos* representan los sujetos y las *aristas* las relaciones entre ellos. Estos vínculos pueden ser de tipo dirigidos cuando la relación es unilateral y no dirigidos cuando la relación es recíproca. Para el caso de las comisiones, los vínculos son de tipo no dirigido pues muestran coincidencias de características. El análisis de estas relaciones utilizó el modelo estático *p1* que permite observar efectos individuales o entre parejas. Junto a esto, se utilizó el algoritmo ForceAtlas 2 que favorece una visualización en el espacio para redes tanto pequeñas como grandes (de 10 a 10.000 nodos), lo que permite una mejor interpretación cualitativa en relación con la cercanía y repulsión de los nodos.

Resultados descriptivos

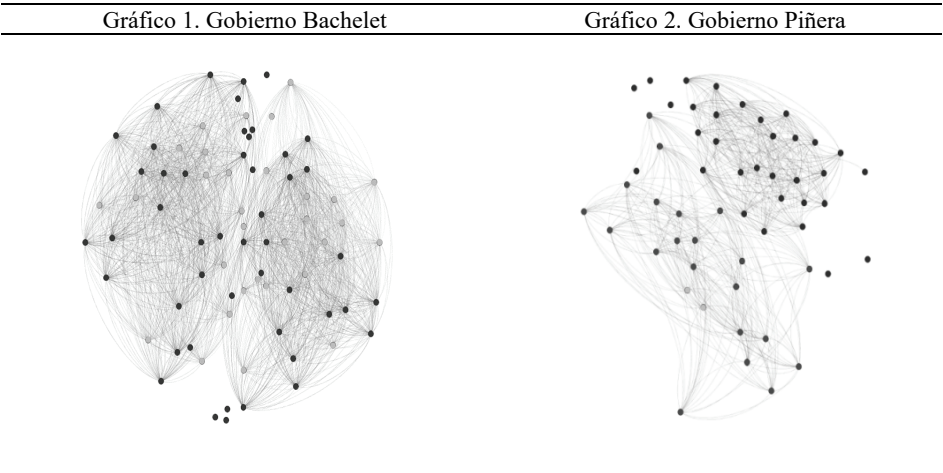
Con respecto al sexo de los integrantes, el grupo está compuesto mayoritariamente por hombres. De hecho, la participación femenina alcanzó durante el gobierno de Michelle Bachelet un 25 por ciento y durante el gobierno de Sebastián Piñera un 20 por ciento. Por otro lado, en relación con el nivel educacional alcanzado, un elevado número de consejeros posee grados de magíster y doctorado

(27 por ciento y 32 por ciento, respectivamente), lo que es similar al porcentaje de aquellos con grado profesional (28 por ciento). El resto (13 por ciento) no registra ningún grado de educación formal. Cabe mencionar que este porcentaje equivale a un grupo 44 personas, 40 pertenecientes al período presidencial de Michelle Bachelet y tan solo cuatro al de Sebastián Piñera. Con respecto a las profesiones, para el período de Sebastián Piñera el grupo se compone mayoritariamente de profesionales ligados a las áreas de administración y economía e ingeniería y ciencias naturales². Por otro lado, en el gobierno de Michelle Bachelet el grupo se compone en su mayoría de profesionales ligados a las humanidades y ciencias sociales. En una línea similar, los postgrados (magíster y doctorado) se concentran en economía. Por otro lado, siguiendo la descripción en la línea de la *expertise*, de los 351 consejeros, 221 (63 por ciento) presentan trayectoria en el mundo académico ya sea en un cargo directivo³ o de docencia en alguna universidad o centros de formación técnica. Bajo este mismo enfoque, con respecto a los centros de estudios o *think tanks*, 45 consejeros del gobierno de Michelle Bachelet registran participación, mientras que, para el gobierno de Sebastián Piñera, solo 37 lo hacen. Destaca CIEPLAN durante el gobierno de Bachelet y Libertad y Desarrollo durante el gobierno de Sebastián Piñera. Además, en ambos casos, el Centro de estudios Públicos (CEP) se encuentra en segundo lugar en términos de participación. Otro espacio donde se reclutan expertos son los organismos internacionales, los que representan alrededor de un 30 por ciento en ambos gobiernos. Destacan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos de las Naciones Unidas. En contraste con lo relacionado con el capital técnico, resulta interesante mencionar que, para ambos períodos presidenciales, no se registra una gran militancia política conocida: 21 por ciento en el período de Michelle Bachelet y 16 por ciento en el período de Sebastián Piñera. Sumado a esto, dentro de los cargos ocupados en el sector público, destacan las figuras de asesor y consejero. Cargos que superan por mucho a perfiles más políticos como ministros, subsecretarios, diputados, senadores y cargos de confianza presidencial, que en general tienden a estar presentes en comisiones de origen coyuntural. Con respecto a los cargos por gobierno, estos se concentran, para el período de Michelle Bachelet, en los tres gobiernos concertacionistas previos; y para el período de Sebastián Piñera, en su propio gobierno, los de la Concertación y la dictadura.

Espacios de socialización de los consejeros (as): *clusters* educacionales y profesionales

En el siguiente apartado se realiza un ARS, desde un enfoque comparado, para observar los vínculos entre los consejeros en los espacios de socialización educacional. Junto a esto, se busca identificar el grado de concentración de las principales ocupaciones de los consejeros.

Figura 1: Redes de conexiones en las universidades de pregrado



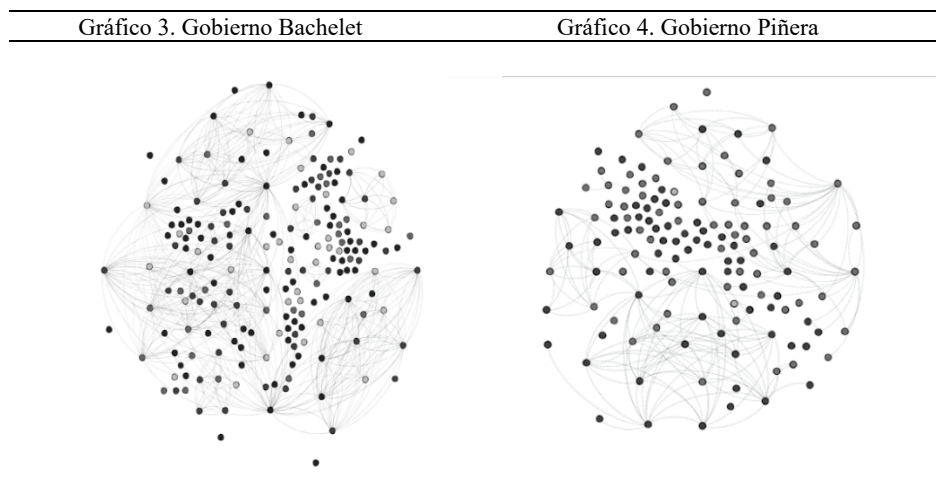
Fuente: Elaboración propia. Nota: Para mayor claridad los grafos fueron generados con una proporcionalidad de visualización del 40 por ciento.

El ARS permite evidenciar dos grandes espacios de socialización universitarios: la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para el caso de las comisiones de Michelle Bachelet, ambos *clusters* están bastante cohesionados entre sí, lo que se evidencia por la gran cantidad de vínculos compartidos. Además, ambos espacios también se encuentran fuertemente vinculados entre sí, compartiendo un gran número de conexiones. El periodo de Sebastián Piñera muestra un comportamiento similar, sin embargo, la Universidad Católica muestra mayores vínculos como espacio de socialización, así como también menores conexiones con la Universidad de Chile.

En las redes de postgrado se observa una menor cohesión entre nodos y, por tanto, *clusters* menos definidos y nodos más dispersos. Esto se explica porque la pertenencia a una comunidad de postgrado resulta más exclusiva y, por tanto, no todos los individuos se encuentran conectados entre sí. Quienes sí lo hacen, forman *clusters* pequeños y poco conectados, a excepción de algunos individuos que juegan un rol de intermediarios conectando comunidades. Así, en ambos sociogramas es posible observar la conformación de tres *clusters* interconectados, los que para el gobierno de Michelle Bachelet corresponden a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de California en Los Ángeles; y para el gobierno de Sebastián Piñera corresponden a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Harvard.

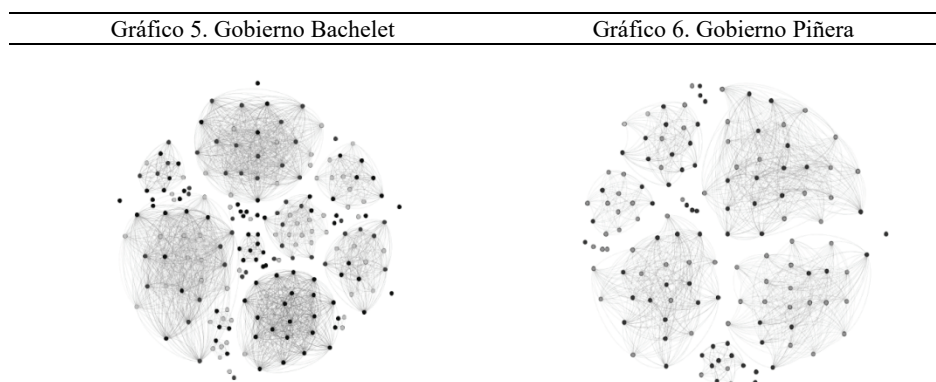
Los gráficos 5 y 6, evidencian mayoritariamente *clusters* correspondientes a profesiones, aunque es posible distinguir un grupo conformado por representantes estudiantiles en el gobierno de Michelle Bachelet. En el gráfico 5 las profesiones predominantes son: ingeniero comercial, economista, abogado, profesor e

Figura 2: Redes de conexiones en las Universidades de postgrado



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Redes de ocupaciones



Fuente: Elaboración propia

ingeniero civil. Por otro lado, el gráfico 6 correspondiente a la red de ocupaciones de Sebastián Piñera, evidencia seis *clusters* de profesionales: ingenieros civiles, economistas, ingenieros comerciales, abogados, médicos y arquitectos. Al comparar ambos sociogramas, la red de las comisiones de Michelle Bachelet muestra una mayor diversificación de comunidades con fuertes vínculos al interior de cada una de ellas. Por otro lado, la red de comisiones de Sebastián Piñera se encuentra menos diversificada y, por tanto, presenta mayor cohesión en términos generales. A pesar de esto, los vínculos internos de las comunidades son más débiles.

Conclusiones

Se observan las CAPs como escenarios de acción de la élite intelectual por medio de la presencia de una fuerte y dominante tecnocracia. Se confirma por tanto que las CAPs *ad hoc* no se configuran, en general, como espacios de participación ciudadana y democratización de actores e ideas. Asimismo se concluye que, a pesar de la participación de la élite política, no se observan tendencias políticas fuertes al interior de las comisiones. Es decir, las CAPs sí cumplen con las características de racionalidad e imparcialidad política, a pesar de ser instancias creadas discrecionalmente por los gobiernos. Este hallazgo permite observar la composición de una élite distinta a las revisadas por la literatura, aunque con una estructura social endogámica similar. En consecuencia, estos espacios alternativos de discusión pública no cumplen con el discurso de pluralidad que señalan, a pesar de constituirse como una opción real de congregar distintos puntos de vista ciudadanos. Esto evidencia una dominación de la tecnocracia, dando lugar a una tensión entre *expertise* y democracia representativa. El análisis descriptivo de esta investigación nos permite caracterizar a los comisionados como hombres, con un alto nivel educacional, formados en las dos principales universidades de Chile y con, casi en su totalidad, estudios de postgrado en Chile y Estados Unidos. Dentro de sus especializaciones se encuentran las ciencias económicas y las ciencias duras en el caso del gobierno de Sebastián Piñera, y las humanidades en el caso de Bachelet.

Los consejeros también presentan una importante carrera académica que avala su *expertise* en algún área de especialización. Junto a esto, también es posible advertir la pertenencia de algunos comisionados a *think tanks* o centros de estudios, sin embargo, esta solo alcanza alrededor de un 25 por ciento de los integrantes. Dentro de ellos, el CEP y CIEPLAN concentran en igual cantidad la mayor parte de consejeros que registran esta participación. La variable *think tank* resulta particularmente interesante pues, estudios sobre élites políticas durante los gobiernos de la Concertación, señalaron a esta variable como determinante para formar parte de la élite gubernamental. Cociña y Toro (2009) definieron como fundamental la influencia de los *think tanks* en el Ejecutivo, especialmente en lo referido a estrategias para el acceso a espacios de poder, como la participación en comisiones y el posicionamiento de miembros en cargos de gobierno. En esta misma línea, Olivares, González-Bustamante, Meneses y Rodríguez (2014) señalaron que se produce un movimiento de personas entre el Ejecutivo y los *think tanks*, que evidencia una gran conexión entre ellos. Contrariamente a esto, las CAPs no evidencian una gran presencia de centros de estudios, lo que permite observar que el reclutamiento de expertos provino desde otros sectores más técnicos, como los centros de estudios universitarios. A esto se le suma la participación en organismos internacionales que alcanza alrededor de un 30 por ciento en ambos gobiernos.

La confirmación de actores tecnócratas se sustenta en la ausencia de capitales políticos. En ambos períodos presidenciales no se registra una gran militancia

política. Por otro lado, si bien la mayoría de los integrantes presenta participación en el sector público, el cargo de consejero o asesor técnico es el que predomina. Aquello evidencia una especie de “carrera tecnócrata” en el Estado, o reconocimiento dentro de éste por participar constantemente de este tipo de instancias como paneles de expertos o consejos técnicos permanentes que respaldan su conocimiento, *expertise* y trayectoria en diversas materias. Lo anterior, permite identificar en el concepto planteado por Joignant (2011c) a tecnócratas pragmáticos,⁴ es decir, actores políticamente independientes, quienes podrían transitar de un gobierno de izquierda a uno de derecha sin ningún problema. También encontramos, en la misma tipología de Joignant (2011c), miembros de tipo tecnócrata político. En esencia, individuos con un capital político menor, que alcanzan niveles muy bajos de actividad política como ser simpatizante o militante pasivo de un partido.

El ARS evidencia los espacios universitarios como los más importantes en el proceso de socialización de los comisionados. Estos espacios están muy cohesionados entre sí y con fuertes vínculos tanto al interior de la comunidad como entre comunidades. Por otro lado, los espacios de especialización resultan ser menos determinantes en el proceso de socialización, aunque sí presentan una cierta concentración, lo que muestra comunidades mucho más exclusivas y cerradas. Por último, las redes de ocupaciones muestran mayor diversificación de grupos, siendo las comisiones de Michelle Bachelet mucho más diversas pero cerradas, a diferencia de las de Sebastián Piñera que son menos diversas, pero con mayor vinculación entre ellas. Las CAPs como instancias de participación surgen debido a conflictos coyunturales o por enmarcarse en el programa de gobierno del presidente, la mayoría de estas realiza instancias de participación con actores relevantes como expertos, organismos internacionales y políticos, sirviendo su trabajo como insumo, la mayoría de las veces, para el envío de un proyecto de ley desde el Ejecutivo.

Finalmente, con respecto a los hallazgos de este trabajo, resultaría interesante profundizar en el estudio y análisis de estas instancias alternativas de formulación de políticas públicas como lo son las CAPs *ad hoc*. En este sentido, estudiar el proceso político y el contexto prelegislativo en el que se enmarcan las CAPs constituye una línea de investigación relevante para comprender la tecnocracia y el rol legislativo en los sistemas presidencialistas. Otro punto importante de estudiar estos espacios radica fundamentalmente en su impacto a nivel de formulación de políticas públicas. Un estudio sobre las votaciones de los proyectos y por tanto de la materialización de los proyectos en leyes, permitiría observar aún mejor el verdadero impacto en política pública de las comisiones *ad hoc*, así como también la reacción de la opinión pública ante el resultado final. Además, esto permitiría observar cómo responde la élite parlamentaria a estas instancias, con el fin de constatar si existe aún la rivalidad entre los políticos y los tecnócratas.

Carla Cisternas Guasch <carla.cisternas@usach.cl> es Asistente de Investigación del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Administradora Pública y Licenciada en Ciencias de la Administración Pública por la Universidad de Santiago de Chile. Estudiante del Programa de Magíster en Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Becaria CONICYT-PFCHA/Magíster Nacional/2017/ 22170832. Sus áreas de interés se enfocan en la sociología política y metodología de la investigación, con foco en métodos mixtos. Entre sus publicaciones se encuentra: González-Bustamante, B., & Cisternas, C. (2016), *Élites políticas en el poder legislativo chileno: la Cámara de Diputados (1990-2014)*, *Política, Revista de Ciencia Política*, 54(2), 19-52.

Javiera Vásquez Parraguez <javiera.vasquez@usach.cl> es Ayudante ad honorem del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Analista en Gestión de Personas del Consejo Nacional de Educación en Chile. Administradora Pública y Licenciada en Ciencias de la Administración Pública por la Universidad de Santiago de Chile. Entre 2013 y 2014 participó del programa de intercambio de Wiesbaden Business School en Hochschule RheinMain, Alemania. Sus áreas de interés se relacionan con la gestión de personas en los sistemas de servicio civil y la profesionalización de las carreras funcionarias.

Agradecimientos: Agradecemos profundamente a Bastián González-Bustamante y Diego Barria por sus valiosos comentarios. Carla Cisternas Guasch agradece el apoyo financiero para sus estudios de postgrado a CONICYT-PFCHA/MagísterNacional/2017-22170832.

Notas

1. Algunos estudios empíricos que plantean esta tensión son Radaelli (1999), Freeman (2002) y Eriksen (2011).
2. Se utiliza el criterio de clasificación de profesiones de Aguilera (2009), pero se adiciona una categoría correspondiente a arquitectura, diseño y construcción, pues su no adaptación podría haber alterado el resultado de las otras categorías de manera significativa.
3. Se contabilizaron como directivos: rectores, decanos, vicedecanos, jefes de carrera, entre otros.
4. El concepto de tecnocracia ha sido bastante debatido y, en consecuencia, poco consensuado. Para este trabajo, se utilizó la definición de Joignant (2011c) debido a la comparabilidad posible entre sujetos que habitan el campo político chileno. Para otras definiciones y debates clásicos sobre el concepto de tecnocracia, véase Centeno (1997, 1993) y Putnam (1977).

Referencias

- Aguilera, C. (2007). Participación ciudadana en el gobierno de Bachelet: consejos asesores presidenciales. *América Latina Hoy*, 46: 119-143.
- (2009). *Un análisis de las comisiones asesoras presidencia- les del gobierno de Michelle Bachelet*. Santiago de Chile: FLACSO.
- Aguilera, C., & Fuentes, C. (2009). Gobernar por encuestas: desafíos para una democracia contemporánea. En R. Cordero. (Ed.), *Sociedad de la Opinión*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Brown, M. B. (2009). *Science in Democracy: Expertise, Institutions, and Representation*. Cambridge: Institute Technology Massachusetts Press.
- Centeno, M., & Wolfson, L. (1997). Redefiniendo la tecnocracia. *Desarrollo Económico*, 37(146): 215-240.
- Centeno, M. (1993). The New Leviathan: The Dynamics and Limits of Technocracy. *Theory and Society*, 22(3): 307-335.
- Cociña, M., & Toro, S. (2009). Los think tanks y su rol en la arena política chilena, En E. Mendizábal & K. Sample. (Eds.), *Dime a quién escuchas... Think tanks y partidos políticos en América Latina*. Lima: IDEA Internacional & ODI.
- Delamaza, G. (2011). Elitismo democrático, líderes civiles y tecnopolítica en la reconfiguración de las élites políticas. En A. Joignant & P. Güell. (Eds.), *Notables, tecnócratas y mandarines: Elementos de sociología de las elites en Chile (1990-2010)*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Domínguez, J. (1997). *Technopols. Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Eriksen, E. O. (2011). Governance between expertise and democracy: The case of European Security. *Journal of European Public Policy*, 18(8): 1169-1189.
- Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. New Jersey: Princeton University Press.
- Fisher, F. (2009). *Democracy and Expertise. Reorienting Policy Inquiry*. Oxford: Oxford University Press.
- Freeman, J. R. (2002). Competing Commitments: Technocracy and Democracy in the Design of Monetary Institutions. *International Organization*, 56(4): 889-910.
- Garretón, M., Cruz, M., & Aguirre, F. (2012). La Experiencia de los consejos asesores presidenciales en Chile y la construcción de problemas públicos. *Revista Mexicana de Sociología*, 74(2): 303-340.
- González-Bustamante, B. (2013). Factores de acceso y permanencia de la élite política gubernamental en Chile (1990-2010), *Política, Revista de Ciencia Política*, 51(1): 119-153.
- (2016). Élités políticas, económicas e intelectuales: una agenda de investigación creciente para la ciencia política. *Política, Revista de Ciencia Política*, 54(1): 7-17.
- González-Bustamante, B., & Cisternas, C. (2016). Élités políticas en el poder legislativo chileno: la Cámara de Diputados (1990-2014). *Política, Revista de Ciencia Política*, 54(81): 19-52.
- Huneus, S. (2011). Revisión conceptual en torno a las redes de directorio y propiedad para una sociología de las élites económicas (Working Papers N°3). Recuperado de Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales: <http://www.icso.cl/wp-content/uploads/2011/03/WP-Huneus.pdf>.
- Maillet, A., Toro, S., Olivares, A., & Rodríguez, M. I. (2016). Los monjes fuera del monasterio: CIEPLAN y su producción intelectual durante cuatro décadas de política chilena. *Política, Revista de Ciencia Política*, 54(2), 189-218.

- Joignant, A. (2011a). El Estudio de las Élités: Un Estado del Arte. En M. Mella. (Ed.), *Extraños en la noche: Intelectuales y usos políticos del conocimiento durante la transición chilena*. Santiago de Chile: RIL editores.
- (2011b). Tecnócratas, technopols y dirigentes de partido: tipos de agentes y especies de capital en las elites gubernamentales de la Concertación (1990-2010). En A. Joignant & P. Güell. (Eds.), *Notables, tecnócratas y mandarines: Elementos de sociología de las elites en Chile (1990-2010)*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
- (2011c). The Politics of Technopols: Resources, Political Competence and Collective Leadership in Chile, 1990-2010. *Journal of Latin American Studies*, 43(3): 517-546.
- Olivares A., González-Bustamante, B., Meneses, J., & Rodríguez, M. (2014). Los think tanks en el gabinete: una exploración del caso chileno (2006-2014). *Revista de Sociología*, 29: 37-54.
- Putnam, R. (1977). Elite transformation in advanced industrial societies. An empirical assessment of the theory of technocracy. *Comparative Political Studies*, 10(3): 383-412.
- Radaelli, C. M. (1999). The public policy of the European Union: whither politics of expertise?. *Journal of European Public Policy*, 6(5): 757-774
- Silva, P. (1991). Technocrats and Politics in Chile: from the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks. *Journal of Latin American Studies*, 23(2): 385-410.
- (2010). *En el nombre de la razón: Tecnócratas y políticos en Chile*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Zegart, A. (2004). Blue Ribbons, Black Boxes: Toward a Better Understanding of Presidential Commissions. *Presidential Studies Quarterly* 34(2): 366-393.

Anexo 1: Caracterización Institucional de las CAPs*

Período Michelle Bachelet		
Nombre	Tipo	Origen
Previsión	Técnica	Programa de Gobierno
Infancia	Técnica	Programa de Gobierno
Calidad de la Educación	Participación Ciudadana	Contingencia (Movilización estudiantil)
Probidad	Técnica	Contingencia (Corrupción, caso Chiledeportes y Programa Subsidio al Empleo)
Educación Superior	Participación Ciudadana	Contingencia (Movilización estudiantil)
Trabajo y Equidad	Participación Ciudadana	Contingencia (Movilizaciones de trabajadores)
Valech 2	Participación Ciudadana	Programa de Gobierno

Período Michelle Bachelet		
Razón de ser	Participación	Resultado**
Elaborar propuestas para la reforma del sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley 3.500	Sí	Proyecto de Ley que perfecciona el Sistema Previsional (Reforma Previsional). Adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias establecido en la ley N° 20.255.
Elaborar un diagnóstico de la situación actual y de las insuficiencias existentes en materia de protección a la infancia, para luego, formular y proponer un conjunto de políticas y medidas idóneas para efectos de implementar un sistema de protección a la infancia.	Sí	Crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.
Asesorar en la identificación y formulación de las reformas normativas e instrumentales que se requieren para garantizar el derecho a la educación de calidad para todos los estudiantes.	Sí	La derogación de la LOCE y la aprobación de la Ley General de Educación. Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación superior. Envío de Proyecto de Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad

Período Michelle Bachelet		
Razón de ser	Participación	Resultado**
		de la Educación Parvulario, Básica y Media (Superintendencia de Educación). Aumento de la Subvención Escolar Preferencial. Incremento del N° de Becas y Créditos estudiantiles
Formular un conjunto de proposiciones conducentes a favorecer la eficiencia, objetividad, responsabilidad pública y calidad profesional de la gestión del Estado	No	Agenda de Transparencia
Identificar los desafíos que experimenta el sistema de educación superior y proponer soluciones.	Sí	Proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el fin de regular la oferta de carreras impartidas por instituciones de educación superior autónomas.
Preparar propuestas en materias de trabajo, salarios, competitividad y equidad social.	Sí	Reforma al Seguro de Cesantía Ley para madres trabajadoras Ley sobre Justicia laboral para los trabajadores Ley que regula el régimen de subcontratación y servicios transitorios
Informar al presidente sobre la calificación de personas detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura	Sí	Consagra el deber de los órganos del Estado de individualizar, como víctimas de desaparición forzada, a las personas detenidas desaparecidas que figuran en los informes que indica. Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

* Para la categorización de las variables tipo y origen se utilizó la tipología de Aguilera (2009).

** Proyectos de Ley enviados por el Ejecutivo.

Período Sebastián Piñera		
Nombre	Tipo	Origen
Mujer, Trabajo y Maternidad	Técnica	Programa de Gobierno
Salud	Técnica	Contingencia (Críticas al sistema de salud)

Período Sebastián Piñera		
Nombre	Tipo	Origen
Reforma a la regulación y supervisión financiera	Técnica	Programa de Gobierno
Seguridad en el Trabajo	Técnica	Contingencia (Derrumbe mina San José)
Desarrollo Eléctrico	Técnica	Programa de gobierno
Plan Garantizado de Salud en las Isapres	Técnica	Contingencia (Acuerdo por la llamada ley corta de ISAPRES, tras fallo del Tribunal Constitucional)
Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior	Técnica	Contingencia (Movilización estudiantil)
Defensa de la Libre Competencia	Técnica	Contingencia (Colusión de empresas avícolas)
Política Nacional de Desarrollo Urbano	Participación ciudadana	Programa de gobierno
Actualización de la línea de la pobreza y la pobreza extrema	Técnica	Contingencia (Críticas a la Casen 2011)
Institucionalidad Ciencia, Tecnología e Innovación	Técnica	Programa de gobierno

Período Sebastián Piñera		
Razón de ser	Participación	Resultado
Asesoramiento Presidencial	Sí	Ley de Postnatal Parental
Proponer las bases de una nueva ley	Sí	Proyecto Agencia Nacional de Medicamentos Exime y rebaja el 7% en salud a jubilados Aplica nuevos criterios a contrato de salud
Analizar el actual sistema de regulación financiera y proponer reformas	Sí	Tres proyectos de ley en la agenda MKB: Regulación tratamiento tributario instrumentos derivados Modernización y fomento de la competencia en el sistema financiero Ley que regula el contrato de seguro

Período Sebastián Piñera		
Razón de ser	Participación	Resultado
Realizar un diagnóstico de la seguridad laboral y realizar recomendaciones de política pública	Sí	Proyecto de Ley que regula el seguro de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales Reformas al Código del Trabajo y el Código Sanitario
Apoyar al Ministerio de Energía en la elaboración de una estrategia que permita expandir la oferta de electricidad	Sí	Creación de Tribunal del Medio Ambiente y Comité de Agilización de las Inversiones Ley de energías renovables no convencionales Estrategia Nacional de Crecimiento Verde
Analizar un cambio en el sistema de Isapres para luego proponer un PGS. Determinar su valor aproximado y un mecanismo de financiamiento solidario.	No	Proyecto de Ley que modifica el Sistema Privado de Salud.
Estudiar alternativas de financiamiento estudiantil y realizar recomendaciones al Mineduc para que los estudiantes que cuenten con los méritos suficientes puedan acceder a la educación superior.	Sí	Proyecto de Nuevo Financiamiento para la Educación Superior Agencia Nacional de Acreditación de la Educación
Proponer perfeccionamiento a la institucionalidad del país en materia de libre competencia.	Sí	No se registran proyectos de ley.
Elaborar una política urbana para alinear diversos organismos públicos en el territorio y orientar la reformulación de diversos cuerpos legales con respecto a la administración del territorio.	Sí	Plan Nacional de Desarrollo Urbano Creación Comisión Asesora Permanente de Desarrollo Urbano
Estudiar y actualizar la canasta básica, definir conceptos de pobreza, y crear una nueva metodología para medir la pobreza. Además, proponer una definición multidimensional de pobreza y mejoras en la institucionalidad.	Sí	Actualización de la canasta básica Nuevo concepto de pobreza y línea de la pobreza Creación de una nueva Metodología por Ingresos y una Metodología Multidimensional
Elaborar una propuesta de modernización de la ciencia, la tecnología y la innovación.	No	Ley que crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Aumento del presupuesto para CONICYT y creación de su nuevo edificio.